

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA

Auto Interlocutorio

ACCIÓN:	REVISIÓN DE ACUERDOS
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2019-001079-00
DEMANDANTE:	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (njudiciales@valledelcauca.gov.co , lhincapie@procuraduria.gov.co)
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE CANDELARIA – ACUERDO No. 005 DEL 18 DE MARZO DE 2019 (notificaciones@hmasociados.com , concejo@candelaria-valle.gov.co , concejo@candelaria-valle.gov.co , buzon_notificaciones_judiciales@candelaria-valle.gov.co , contactenos@candelaria-valle.gov.co)
MAGISTRADA PONENTE	Dra. LUZ ELENA SIERRA VALENCIA
ASUNTO	RECHAZA POR IMPROCEDENTE RECURSO DE APELACIÓN NIEGA SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y ADICIÓN DE SENTENCIA

Santiago de Cali, Primero (01) de Octubre de Dos Mil Veinte (2020)

Procede la Sala Fija Jurisdiccional de Decisión Oral No. 4, a pronunciarse respecto del recurso de apelación y la solicitud de "aclaración y/o adición" presentada por el apoderado del MUNICIPIO DE CANDELARIA, contra la sentencia del 21 de mayo de 2020 proferida por esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

Esta Sala de conformidad con el trámite dispuesto en el artículo 121 del Decreto 1333 de 1986¹, mediante la referida providencia declaró inexecutable el Acuerdo No. 014 del 15 de octubre de 2015, "Por medio del cual se modifican los Acuerdos Municipales 002 y 021 de 2015, del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Candelaria, y se dictan otras disposiciones", porque para su aprobación no se surtieron las etapas de concertación y consulta consagradas en el artículo 24 de la ley 388 de 1997.

La sentencia fue notificada a través de correo electrónico a las partes, el día 26 de mayo de 2020; el apoderado del MUNICIPIO DE CANDELARIA una vez se reanudaron los

¹ "Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal."

términos judiciales², el día 1 de julio del mismo año interpuso recurso de apelación contra la providencia.

Posteriormente, el mencionado apoderado el día 25 de agosto de 2020, manifestó que realmente lo pretendido no era interponer un recurso de apelación, sino una solicitud de "aclaración y/o adición". Así lo manifestó:

"Si bien es cierto, en escrito presentado el 01 de julio del 2020, se hizo alusión al recurso impugnatorio de apelación contra la sentencia de primera sin número del 21 de mayo del 2020 (...) vale la pena aclarar al despacho que la intención del extremo demandado no fue otra que la de solicitar aclaración y/o adición de la referida providencia en tanto que el numeral tercero del artículo 121 del Decreto 133 de 1986 establece que contra esta decisión no procede recurso alguno.

De esta forma, el escrito radicado ante el despacho el 01 de julio del 2020 (es decir el primer día hábil posterior a la notificación de la sentencia), no se trata de un recurso, sino de una solicitud de aclaración y/o adición.

*En vista de ello y teniendo en cuenta que a la fecha no se le ha dado trámite al escrito que fue presentado dentro del término de ejecutoria, se solicita al despacho dar por superado el obstáculo formal a la luz de los principios generales del derecho que orientan la tutela efectiva, dentro del marco de una justicia pronta y eficaz. Para lo cual se requiere que se haga un estudio del libelo, NO como un recurso de apelación sino como una solicitud de aclaración y/o adición, siendo esta última la auténtica intención del suplicante.
(...)"*

En el nuevo escrito, el apoderado haciendo referencia al artículo 285 del Código General del Proceso, señaló que la solicitud de "aclaración y/o adición" se circunscribe a lo siguiente:

"Se dejó por fuera el estudio del espíritu de la norma contenida en la Ley 1537 de 2012 "Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones", y con la que el legislador pretendió garantizar la construcción de viviendas de interés prioritario (en adelante VIPS) y viviendas de interés social (en adelante VIS), autorizando para ello la incorporación del suelo rural, suburbano y expansión urbana al perímetro urbano por una sola vez. Apelando a lo anterior, la Ley enmarco en el artículo 47 transitorio modificado por el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015, la posibilidad de construir este tipo de viviendas solo si cumplían a cabalidad con los requisitos descritos en dicho artículo.

Ahora bien, en cuanto a los periodos constitucionales autorizados en la Ley 1537 de 2012 nos encontramos con 2 y en la Ley 1753 de 2015 con 3, distribuidos así:

- Artículo 47 de la Ley 1537 de 2015 indicó de los años 2012 a 2016, siendo los periodos constitucionales: 2012-2015 y 2016-2019.

- Artículo 91 de la Ley 1753 de 2015 indica de los años 2015 a 2020, comprendiendo los periodos constitucionales de las administraciones municipales: 2012-2015, 2016-2019 y 2020-2023.

² A partir del 1 de julio de 2020, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo No. PCSJA20-11567 del 5 de junio del mismo año, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura.

Haciendo una interpretación al tenor literal de la norma de cuya lectura se puede deducir la intención del legislador y el espíritu de la misma, cada uno de estos periodos de administraciones tiene la oportunidad por una sola vez de incorporar al perímetro urbano, los predios localizados en suelo rural, suburbano y de expansión urbana cumpliendo los requisitos del artículo.

Es decir, independientemente que el mandatario de 2012-2015 haya realizado la incorporación autorizada, el mandatario del 2016-2019 puede hacerlo y el de 2020-2023 podrá hacerlo, este último tiene la limitante de hacer únicamente durante el año 2020.

Si la nueva norma consagra esta premisa nuevamente, se debe interpretar al tenor de lo dispuesto en la misma, pues en el sistema del derecho positivo colombiano una regla en este sentido se encuentra instituida en el artículo 27 del Código Civil que establece que "Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu", el artículo 28 del mismo Código que, textualmente, enseña: "Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal." Así como el artículo 29 que establece que "Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den lo que profesan la misma ciencia o arte..."; en este orden de ideas, esta es la base legal para que los operadores jurídicos, en general, fundamenten la aplicación de los términos mencionados en la Ley y que no encuentren significado establecido dentro del ordenamiento jurídico.

(...)

Además de lo anterior, la Sala tampoco efectuó pronunciamiento alguno acerca de lo manifestado en la contestación y en los alegatos de conclusiones, respecto a que la Gobernación del Valle en el presente caso pretendió la nulidad de este Acuerdo cuando en un caso similar como es la expedición del Acuerdo No. 080 de 2019 "por medio del cual se adopta el ajuste seccional al plan de ordenamiento territorial del municipio de Palmira, para incorporar predios al perímetro urbano", la Gobernación expidió el concepto favorable 1.1.40-15.1-2550 del 09 de septiembre de 2019 suscrito por la Directora del Departamento Administrativo de Jurídica y la Subdirectora de Representación Judicial, documentos que fueron aportados como prueba con la contestación y que tampoco fueron tenidos en cuenta al momento de emitir el fallo, ni fueron mencionados en la parte considerativa.

En razón a lo anterior solicito se me aclare:

1. Solicito comedidamente se adicione la parte considerativa de la sentencia de primera sin número del 21 de mayo del 2020, notificada por correo electrónico el día 26 de mayo del 2020, en el sentido de que se efectuó el estudio del espíritu de la Ley 1537 de 2012 con el que se puede establecer cuáles fueron los periodos constitucionales autorizados y en los cuales se tenía la oportunidad por una sola vez de incorporar al perímetro urbano, los predios localizados en suelo rural, suburbano y de expansión urbana cumpliendo los requisitos.

2. Solicito comedidamente se adicione la parte considerativa de la sentencia de primera sin número del 21 de mayo del 2020, notificada por correo electrónico el día 26 de mayo del 2020, en el sentido de que se incluya el estudio de la prueba documental atinente al concepto favorable 1.1.40-15.1-2550 del 09 de septiembre de 2019 suscrito por la Directora del Departamento Administrativo de Jurídica y la Subdirectora de Representación Judicial, documentos que fueron aportados como prueba con la contestación y que tampoco fue tenida en cuenta al momento de emitir el fallo, ni fueron mencionados en la parte considerativa."

II. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

2.1. El numeral 3° del artículo 121 del Decreto 1333 de 1986, respecto de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos en el trámite de la revisión de acuerdos expedidos por los Concejos Municipales, consagra que *"contra esta decisión, que produce efectos de cosa juzgada en relación con los preceptos constitucionales y legales confrontados, no procederá recurso alguno."*

De conformidad con la disposición en cita, se rechazará por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del MUNICIPIO DE CANDELARIA, contra la sentencia del 21 de mayo de 2020 proferida por esta Corporación, en la medida que dicha providencia no puede ser objeto de recurso alguno.

2.2. De otro lado, el artículo 285 del Código General del Proceso, indica que es procedente la aclaración de las sentencias de oficio o a solicitud de parte, cuando ofrezcan motivo de duda en su parte resolutive. En todo caso, la solicitud debe ser formulada durante el término de ejecutoria de la providencia. La norma es del siguiente tenor:

"Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella."

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia."

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración."

Por su parte, el artículo 287 ibídem señala que es procedente la adición de las sentencias de oficio o a solicitud de parte, cuando se haya omitido resolver sobre alguno de los puntos de la litis, el cual necesariamente por ley tenía que ser objeto de pronunciamiento. Así mismo, la solicitud debe ser formulada durante el término de ejecutoria de la providencia. La disposición se transcribe:

"Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad."

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal.”

Descendiendo al caso concreto, el apoderado manifestó que su intención no fue presentar un recurso de apelación, no obstante, lo que observa la Sala, es que lo pretendido si fue recurrir la providencia, más allá de que ahora diga que se trata de una solicitud de “*aclaración y/o adición*”, sin tener en cuenta que se trata de figuras procesales diferentes.

En efecto, en ambos escritos se consignó que la providencia no tuvo en cuenta el “*espíritu*” de las Leyes 1537 de 2012 y 1753 de 2015, porque estima el apoderado como lo consignó en la intervención para defender la legalidad del acto administrativo sometido a revisión, que éstas permitieron que por iniciativa de los alcaldes municipales, se ajustara por una sola vez en cada uno de los periodos constitucionales 2012-2015, 2016-2019 y 2020-2023, el plan de ordenamiento territorial para incorporar al perímetro urbano predios localizados en sector rural, suburbano y de expansión urbana, sin adelantar los trámites de concertación y consulta previstos en el artículo 24 de la Ley 388 de 1997.

Sobre el particular, debe anotarse que ese argumento no constituye un motivo de aclaración o adición, sino de inconformidad con la sentencia, concretamente con el concepto de la Sala, en el sentido que por tratarse de una facultad excepcional concedida a los alcaldes municipales para ajustar el POT sin adelantar las instancias de concertación interinstitucional y consulta ciudadana, solo podía hacerse uso de ésta por una sola vez, como en efecto sucedió en el MUNICIPIO DE CANDELARIA, con la expedición del Acuerdo No. 021 del 28 de noviembre de 2015, a través del cual se ajustó con anterioridad el POT para la incorporación de dicha clase de predios al perímetro urbano.

Ciertamente, sin desconocer que la finalidad del artículo 47 de la Ley 1537 de 2012 era promover la construcción de viviendas de interés social y de interés prioritario, para lo cual se concedió la facultad de ajustar el POT a los alcaldes municipales por una sola vez, entre los años 2012 a 2016 con aprobación directa de los concejos municipales, y que el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015 la extendió hasta el año 2020, la Sala consideró que en este caso la potestad excepcional se agotó con el Acuerdo No. 021 del 28 de noviembre de

2015, consideración con la que no está de acuerdo el apoderado del ente territorial y que ahora pretende su reconsideración con el pretexto de una aclaración del fallo.

Finalmente, respecto al argumento referido a que en la sentencia no se estudió el concepto favorable emitido por la Directora del Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca de fecha 9 de septiembre de 2019, emitido con ocasión de la revisión de un acuerdo municipal del Concejo de Palmira mediante el cual se ajustó el POT de ese ente territorial para la incorporación de predios al perímetro urbano, tampoco es motivo para la aclaración de la providencia, pues no explica cuáles son los argumentos o partes de la misma que ofrezcan verdadero motivo de duda que influyan en la parte resolutive de la sentencia, tal como lo exige el artículo 285 del Código General del Proceso.

Del mismo modo, el aludido argumento, tampoco es motivo de adición de la sentencia, en la medida que si bien el MUNICIPIO DE CANDELARIA mencionó escuetamente ese concepto para la defensa del acto administrativo, no es un asunto que necesariamente tuviera que ser objeto de pronunciamiento, porque esta Corporación para la resolución de fondo de las solicitudes de revisión de los acuerdos municipales, estudia la legalidad de los actos administrativos previa su confrontación directa con los preceptos constitucionales y legales, en los términos del numeral 3° del artículo 121 del Decreto 1333 de 1986.

En este sentido, sin perjuicio de que puedan ser tomados en cuenta otros elementos para su análisis, en el presente asunto, al encontrarse configurado un vicio de ilegalidad que afectaba la esencia del acuerdo municipal, tal como la falta de cumplimiento de los requisitos de forma para su aprobación, es decir, el adelantamiento de las etapas de concertación y consulta ciudadana señaladas en el artículo 24 de la Ley 388 de 1997, necesarias en este caso para ajustar de nuevo el POT del MUNICIPIO DE CANDELARIA con el fin de incorporar predios al perímetro urbano, no resultaba necesario el estudio de otros aspectos diferentes.

2.3. Por lo discurrido hasta aquí, se rechazará por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el MUNICIPIO DE CANDELARIA y se negará la solicitud de "*aclaración y/o adición*", como quiera que los argumentos expuestos denotan cuestionamientos con lo decidido en la sentencia y tampoco se advierte que se hayan dejado de resolver aspectos fundamentales en la sentencia.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, en Sala Fija Jurisdiccional de Decisión Oral No. 4,

III. RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el MUNICIPIO DE CANDELARIA, contra la sentencia del 21 de mayo de 2020 proferida por esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.

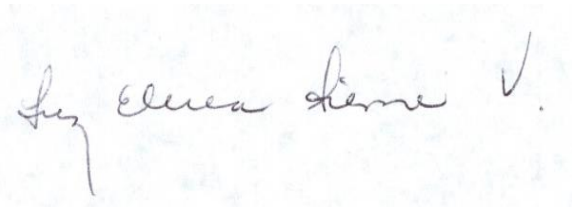
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de "*aclaración y/o adición*" de la referida sentencia, por lo expuesto en esta providencia.

TERCERO: Notificado y ejecutoriado este proveído archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Discutido y aprobado en Sala Fija Jurisdiccional de Decisión Oral No. 4 de la fecha.

Los Magistrados,



LUZ ELENA SIERRA VALENCIA



PATRICIA FEUILLET PALOMARES



OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT